

## ORDEN

**NÚMERO 4304/2025**

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Unidad Administrativa  
**DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN**

**Exp.: 046/2022 (LOTE 2)**

Examinados los documentos obrantes en el expediente procede resolver teniendo en cuenta los siguientes

### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** Mediante Orden número 1092/2022, de 13 de mayo de 2022, se acuerda la adjudicación por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social del contrato de servicios denominado *“Gestión de dos Centros de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas en la Comunidad de Madrid (2 lotes)”*, LOTE 2, Centro de Acogida nº 4” a la entidad ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA (G80054760).

La fecha de formalización del contrato mencionado fue el 17 de junio de 2022, con un plazo de ejecución que comprendía desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023

Mediante Orden número 3195/2023, de 26 de octubre, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, se aprobó la 1ª prórroga de este contrato, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

Posteriormente, mediante orden número 3417/2024, de 15 de noviembre, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, se aprobó la 2ª prórroga del contrato mencionado, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

**SEGUNDO.-** La Dirección General de la Mujer comunicó a la ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA la puesta a disposición, a través de sendos comunicados notificados en tiempo y forma a la entidad, de fecha 20 de junio y de 23 de junio, ambos de 2025, del expediente abierto, obrante en la Dirección General de la Mujer, consistente en la siguiente documentación:

- Informe de la Fiscalía de Alcalá de Henares, de 19 de mayo de 2025.

Según consta en la documentación enviada por la Fiscalía de Alcalá de Henares, en relación con las diligencias de investigación preprocesal nº 52/2025, la Fiscal Jefe hace constar lo siguiente:

***“Si bien no se ha apreciado la existencia de infracción penal, sí se han puesto de relieve vicisitudes que denotan prácticas inadecuadas instauradas desde hace años. Todo lo cual se pone en su conocimiento a los efectos oportunos, si bien los relatos se remiten anonimizados convenientemente, por haber manifestado algunas de ellas temor a sufrir represalias como consecuencia de sus manifestaciones”***

Entre esos relatos anonimizados, se realizan manifestaciones que denotan comportamientos inadecuados tanto hacia las mujeres como hacia las profesionales, con actuaciones de maltrato, carga innecesaria de trabajo, autoritarismo o actitudes humillantes y crueles. A modo de ejemplo, se relacionan a continuación algunos de esos testimonios:

- La coordinadora desvalorizaba a las mujeres usuarias, refiriéndose a ellas a través de apodos denigrantes ... ejercía toda una campaña de hostigamiento con humillaciones y



- ataques a la reputación ... se convirtió en una pesadilla porque ya cada cosa que escribías mal o hacías mal se convertía en la comidilla para ridiculizar y envenenar a las compañeras ... el resto tenía motes ...
- El trato a las usuarias era nefasto, además de controlarlas, ridiculizarlas ... he podido ver cómo se aísla a las mujeres ... se les juzga como madre y como mujeres ... se les tutoriza absolutamente todo.
  - Tratan a las mujeres de forma denigrante, hablándoles mal y haciéndolas sentir pequeñas ... se cuestiona su capacidad como madres, se imponen horarios y actividades sin flexibilidad, limpiezas profundas mensuales que carecen de sentido, citas que obstaculizan cualquier intento de descanso o recuperación...
  - Actitudes humillantes y crueles, como críticas al aspecto físico de las mujeres y el uso de apodosos denigrantes para dirigirse tanto a ellas como a sus hijos e hijas
- Entrevistas realizadas por personal técnico de la Dirección General de la Mujer (DGM) a usuarias y ex usuarias del Centro de Acogida nº 4 (en adelante CA4).  
Con fecha 8 de mayo de 2024 se procede a realizar una serie de entrevistas, por parte de la jefa del servicio de coordinación de centros residenciales, tanto a las mujeres alojadas en ese momento en el CA4, como a las mujeres que estuvieron alojadas en el CA4 y causaron baja voluntaria en el recurso y a tres profesionales que forman parte de la red de centros. Todas ellas realizan manifestaciones que en gran parte coinciden con los testimonios remitidos por la Fiscalía. Por parte de las profesionales:
    - “no comparte cómo se lleva a cabo intervención ni el trato que se les da a las mujeres”,
    - “a las mujeres se las dejaba sin comer si no llegaban a la hora indicaba y que había un régimen carcelario para las mujeres”, o que
    - “el trato a las mujeres no es adecuado”.

En cuanto a las mujeres que estuvieron alojadas en el CA4 y han causado baja voluntaria, manifiestan, entre otras cosas, que:

- “...le limitaban el número de biberones que tenía que dar a su hijo como pauta educativa sin tener en cuenta lo que ella opinaba al respecto”,
- “las salidas de ocio eran obligatorias y que si no acudías te amonestaban” ... se la decía “aspiras a mucho”,
- “es un espacio hostil donde todo el mundo está alerta y callada para evitar problemas” ... “las mujeres permanecen mucho tiempo en las habitaciones para evitar problemas”,
- “... intentó llevar a su hijo al hospital ya que debido a la gastroenteritis le veía mal y no se la permitió ... llamó al 112 ... su hijo permaneció ingresado 3 días”,
- “las asambleas se realizaban a las 23:30 horas con a la educadora de noche, que duraba varias horas y la educadora les trasladaba que a ella tampoco le trataba bien el equipo de profesionales”,
- “de manera frecuente tenía que hacer limpiezas generales, aunque estuvieran cansadas y en su caso en estado de gestación”,
- “si llegabas tarde a comer ya no podías comer, que ella llegó un día tarde del médico y aunque fue justificado no pudo comer hasta la hora de la cena”

**TERCERO-** Tras acceder al expediente, la entidad presentó escrito de alegaciones firmado por su representante legal y fechado el 2 de julio de 2025.

**CUARTO-** La Dirección General de la Mujer elevó al órgano de contratación una propuesta de imposición de penalidades por importe de 3.235,34 euros, derivados del incumplimiento del PPT por el que se rige el citado contrato.

**QUINTO-** Mediante Orden 3509/2025, de 23 de noviembre, de esta Consejería se acordó el inicio del procedimiento de imposición de penalidades a la entidad contratista en la cantidad de 3.235,34 euros, por incumplimiento de los pliegos por los que se rige este contrato.

En dicha Orden se acordaba también dar audiencia a la citada entidad por un plazo de diez días hábiles para que pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimase oportunas.



**SEXTO-** La ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA presentó el escrito de alegaciones en fecha 5 de noviembre de 2025, en el que se concluye que *“(...) no podemos, por injusto y por los daños ocasionados al equipo y a la entidad, es aceptar ni manifestar conformidad con la propuesta de penalización; por los hechos en que se basa, por no demostrados, a la fecha. Ni contrastados con todas las partes afectadas.*

*Tampoco podemos manifestar conformidad con la propuesta de penalización, debiendo quedar en suspenso, hasta que haya pronunciamiento definitivo del proceso penal en curso.”*

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO:** El artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP) concede al órgano de contratación, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley, la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

El artículo 192.1 de la LCSP establece que los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo.

El artículo 192.2 de la LCSP establece que, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.

El contrato de servicios denominado “Gestión de dos Centros de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas en la Comunidad de Madrid (2 lotes), LOTE 2, Centro de Acogida nº 4”, se rige por lo establecido en sus correspondientes pliegos, Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha 17 de noviembre de 2021 y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de fecha 23 de noviembre de 2021.

**SEGUNDO:** En lo que se refiere a las alegaciones manifestadas por la contratista hay que señalar que las mismas no desvirtúan ni los hechos ni la calificación que se hacía en la Orden 3509/2025, de 23 de noviembre. Entrando en el análisis de las alegaciones, en virtud del informe de la Dirección General de la Mujer de fecha 1 de diciembre que obra en el expediente, hay que señalar lo siguiente:

- En cuanto a su alegación primera relativa al *“Informe de la Fiscalía de Alcalá de Henares de 19 de mayo de 2025”* indicar que *“si bien no se ha apreciado la existencia de infracción penal, sí se han puesto de relieve vicisitudes que denotan prácticas inadecuadas instauradas desde hace años”*, es decir, que al margen de que no se haya apreciado infracción penal como tal, sí que se han evidenciado prácticas inadecuadas tanto hacia las mujeres residentes del centro de acogida como hacia las profesionales empleadas en dicho centro de acogida, lo cual, constituye prueba fehaciente de un funcionamiento y comportamiento incorrecto, y por tanto justificado para la imposición de las penalidades correspondientes tipificadas en la cláusula 1, apartado 21, primer punto, del Pliego de Cláusulas Administrativas, concretamente por incumplimiento grave: *“el trato vejatorio a los usuarios (mujeres y menores y, en su caso, personas dependientes de la mujer)”*.

Asimismo, en cuanto a las entrevistas realizadas a las profesionales, las usuarias y exusuarias del centro de acogida por parte del personal técnico de la Dirección General de la Mujer, señalar que según el apartado 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el contrato, se *“ejercerá la supervisión y control necesarios para asegurar la adecuada prestación y funcionamiento del centro”*, por lo que dichas entrevistas se encuentran dentro de estas tareas de control y supervisión de la adjudicataria en cuanto a la adecuada prestación del servicio, realizando las entrevistas que la Dirección General de la Mujer considere oportunas. Los testimonios recogidos en las mismas, son prueba suficiente del funcionamiento y trato inadecuado a profesionales, usuarias y exusuarias del centro, a la luz de las conclusiones del citado Informe de la Fiscalía de Alcalá de Henares.

- En cuanto a la alegación relativa al escrito de alegaciones de 2 de julio de 2025, tras su acceso al expediente, por parte de la Dirección General de la Mujer fueron revisadas dichas alegaciones. No obstante, existen evidencias probadas que ponen de manifiesto los incumplimientos que se citan en la orden de inicio, y que son demostrativos de la responsabilidad de la entidad en la comisión de los incumplimientos susceptibles de imposición de penalidad.
- En cuanto a la alegación tercera relativa al antecedente de hecho segundo de la Orden 3509/2025, se reitera lo indicado en el análisis de la alegación primera cuyo contenido se remite a las entrevistas de las profesionales, usuarias y exusuarias del centro de acogida que fueron realizadas por el personal técnico de la Dirección General de la Mujer.
- En cuanto a la alegación cuarta relativa al Fundamento de derecho segundo de la Orden 3509/2025, referida al incumplimiento grave de *“la contratación de medios personales sin la acreditación de la solvencia profesional”* (cláusula 1, apartado 21, primer punto, del Pliego de Cláusulas Administrativas), se reitera lo ya indicado en la citada Orden, ya que *“(…) la Directora Técnica de la entidad, D<sup>a</sup> Nuria Manzano, prestó servicios como educadora en el centro sin comunicarlo a la Dirección General de la Mujer y, por tanto, sin contar con validación previa, como exige el PPT. Los profesionales que prestan sus servicios en el centro deben cumplir unos requerimientos que se establecen en los pliegos correspondientes, desconociendo si la directora técnica de la entidad cumple estos requisitos. Y desconociendo también en calidad de qué actuaba en el centro: trabajadora social, educadora, psicóloga, etc.”*, habida cuenta de que en el escrito de alegaciones objeto de análisis ahora, la entidad reconoce que *“(…) D<sup>a</sup> Nuria Manzano apoyó al equipo, técnica y emocionalmente a las compañeras (...) y en apoyo técnico, de la compañera que hubo de asumir la coordinación como suplente”* (página 16 del escrito de alegaciones), por lo que se entiende que la entidad está reconociendo el incumplimiento del ejercicio de una profesional no validada por la Dirección General de la Mujer

**TERCERO:** Una vez desestimadas las alegaciones formuladas por la empresa contratista y constatados los incumplimientos contractuales producidos, hay que resaltar que los hechos descritos anteriormente suponen un incumplimiento de las obligaciones que los pliegos de este contrato imponen al contratista. Concretamente las circunstancias descritas en el apartado segundo de los antecedentes de hecho se tipifican en el apartado 21 de la cláusula 1 del PCAP de la siguiente forma:

**INCUMPLIMIENTO GRAVE:** Se impondrá una penalidad de hasta el 5% del precio de adjudicación mensual del contrato (sin IVA), por cada incumplimiento cometido, considerándose como incumplimientos graves:

- El trato vejatorio a los usuarios (mujeres y menores y, en su caso, personas dependientes de la mujer).
- La contratación de medios personales sin la acreditación de la solvencia profesional.



**CUARTO:** En cuanto al importe de la penalidad por los incumplimientos descritos, hay que reiterarse en lo señalado en la Orden 3509/2025, de 23 de noviembre. En este sentido, el citado apartado 21 de la cláusula 1 del PCAP establece que se impondrá una penalidad de hasta el 10% del precio de adjudicación mensual del contrato (sin IVA), por cada incumplimiento muy grave cometido.

El precio mensual sin IVA por la facturación del servicio es de 32.353,39 euros.

Atendiendo a estas prescripciones, se propone la imposición de las dos penalidades siguientes:

- Dos del 5% del precio de adjudicación mensual del contrato (sin IVA) por el incumplimiento grave, es decir, 5% de 32.353,39 euros.

Resultando:

- 1ª PENALIDAD GRAVE: 1.617,67 euros.
- 2ª PENALIDAD GRAVE: 1.617,67 euros.

Total: 3.235,34 euros

De acuerdo con lo expuesto, y de conformidad con la propuesta de la Dirección General de la Mujer, en aplicación del art. 192.1 de la LCSP, el apartado 21 de la cláusula 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares por el que se rige el contrato

### DISPONGO

Imponer a la entidad **ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA** (G80054760), una penalidad por importe de **TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS** (3.235,34 €) por incumplimiento de los pliegos por los que se rige el contrato de servicios denominado *“Gestión de dos Centros de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas en la Comunidad de Madrid (2 lotes)”*, LOTE 2, Centro de Acogida nº4.

De acuerdo con el artículo 194.2 de la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la penalidad se hará efectiva mediante la deducción de las cantidades que en concepto de certificaciones mensuales deban abonarse al contratista, o sobre la garantía que se haya constituido cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.



Fecha:

A la fecha de la firma

LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES  
(P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023)  
LA DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER

Firmado digitalmente por: REYES RIVERA PATRICIA-ISAURA  
Fecha: 2025.12.15 08:46